

EL PRI EXIGE AL GOBIERNO FEDERAL UNA POLÍTICA INTEGRAL DE REDUCCIÓN DE TARIFAS EN SERVICIOS BÁSICOS: ENERGÍA ELÉCTRICA, GAS LP Y GASOLINA

Veracruz, México. El Partido Revolucionario Institucional (PRI) manifiesta, mediante este posicionamiento técnico y político, su exigencia al Gobierno Federal para implementar una estrategia nacional de reducción de precios en los servicios básicos que constituyen la base operativa de la economía mexicana: electricidad, gas LP y gasolina. El partido subraya que estas tarifas han dejado de ser únicamente indicadores económicos para convertirse en factores críticos que inciden en la estabilidad social, la competitividad productiva y el desarrollo humano. Durante los últimos años, el costo de los servicios básicos en México ha mostrado incrementos sostenidos que no se corresponden con la evolución de los precios internacionales ni con la capacidad adquisitiva de la población. De acuerdo con análisis comparativos de la OCDE y organismos energéticos internacionales, México presenta una de las estructuras tarifarias más regresivas del continente, ya que una proporción significativa del ingreso familiar se destina a servicios esenciales. El PRI enfatiza que este escenario obedece a una falla estructural en la política energética del actual gobierno, particularmente en:



- La ausencia de mecanismos de contención tarifaria basados en criterios técnicos.
- La falta de inversión en infraestructura de generación y distribución.
- La toma de decisiones administrativas sin modelos de planeación energética a largo plazo.

• La desarticulación entre las metas de sostenibilidad y la realidad de los precios domésticos. En un entorno global donde la energía es considerada un activo estratégico, México ha quedado rezagado, comprometiendo su capacidad para alcanzar niveles de productividad y bienestar comparables a los de países desarrollados. Perspectiva comparada con países de alto desarrollo En naciones como Alemania, Noruega, Japón o Canadá, el acceso a servicios básicos a precios competitivos es considerado una política de Estado. Estos países han logrado consolidar modelos energéticos que combinan:

- Regulación eficiente, basada en criterios científicos.
- Subsidios inteligentes, aplicados a segmentos poblacionales específicos y no como herramientas político-electorales.
- Diversificación energética, mediante la implementación de energías renovables de bajo costo.

• Transparencia tarifaria, que evita incrementos abruptos y no justificados.

Este enfoque ha permitido garantizar una estructura tarifaria estable, que reduce la carga económica sobre los hogares y fortalece el tejido productivo. El PRI sostiene que México debe aspirar a este estándar internacional, ya que la energía, el combustible y los insumos básicos son bienes que inciden directamente en la movilidad social. Impacto en la población y el sector productivo de Veracruz En Veracruz, donde convergen actividades estratégicas como el sector portuario, el transporte, la agricultura, la industria petroquímica y el comercio regional, el aumento de tarifas ha generado un impacto profundo. El alza en los costos energéticos se traducen en:

- Pérdida de competitividad, especialmente en sectores agrícolas y pesqueros.
- Incremento en los precios finales de alimentos y bienes de consumo.
- Reducción del margen operativo de pequeñas y medianas empresas.
- Mayor presión económica en los hogares, particularmente en zonas rurales y suburbanas.

Desde la realidad veracruzana, el PRI sostiene que la política energética actual ha sido incapaz de generar las condiciones necesarias para sostener el dinamismo regional y garantizar un estándar de vida digno. El partido reafirma que el acceso a servicios básicos no es únicamente un tema administrativo, sino un asunto de justicia social, estrechamente vinculado a la redistribución de oportunidades y al fortalecimiento del Estado de bienestar. El PRI, con una tradición histórica de construcción institucional, sostiene que el gobierno debe adoptar una postura responsable ante el evidente deterioro del poder adquisitivo. No se trata de una exigencia aislada ni de un posicionamiento partidista, sino de una demanda respaldada por evidencia técnica y comparaciones internacionales. La energía y el combustible no son productos exclusivos del mercado: son bienes estratégicos cuya asequibilidad garantiza la estabilidad económica, la seguridad social y la equidad territorial.



El PRI propone una ruta integral de corrección, basada en prácticas internacionales y en principios de gobernabilidad democrática:

1. Establecimiento de un sistema de contención tarifaria

Basado en modelos de costo-beneficio, análisis de volatilidad internacional y parámetros de seguridad energética.

2. Subsidios dirigidos con criterios de eficiencia

Enfocados en hogares de bajos ingresos, sectores productivos esenciales y microempresas estratégicas para el desarrollo regional.

3. Modernización de la infraestructura energética

Promoviendo generación limpia de bajo costo, reducción de pérdidas técnicas y actualización de redes de distribución.

4. Institucionalización de un modelo de planeación energética 2030–2050

Similar a los modelos aplicados en la Unión Europea y Asia Pacífico, con metas precisas de eficiencia, reducción tarifaria y competitividad.

5. Revisión profunda de los costos de logística y distribución

Particularmente relevante en estados extensos como Veracruz, donde el transporte de insumos es un factor clave en el precio final de los servicios.

Conclusión: energía asequible como fundamento del desarrollo nacional

El PRI reitera su exigencia al Gobierno Federal: es urgente implementar una política pública integral que reduzca los precios de la luz, el gas y la gasolina de manera sostenida y técnicamente fundamentada.

El acceso universal y económico a los servicios básicos es condición indispensable para que México alcance los niveles de bienestar, productividad y movilidad social que caracterizan a las naciones más desarrolladas del mundo.

Con responsabilidad política y con base en análisis técnicos, el PRI reafirma su compromiso con la defensa de la economía familiar, la competitividad regional y el fortalecimiento del Estado social mexicano.